



**JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO-
ELECTORALES DE LA
CIUDADANÍA¹**

EXPEDIENTE: TECDMX-JLDC-
017/2026

PARTE ACTORA: [REDACTED]

AUTORIDADES RESPONSABLES:
ÓRGANO DICTAMINADOR DE LA
ALCALDÍA MILPA ALTA Y OTRA²

MAGISTRADA PONENTE: KARINA
SALGADO LUNAR³

Ciudad de México, a siete de abril de dos mil veintiséis⁴.

Este Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en sesión pública celebrada en esta fecha, **CONFIRMA** la validez de la Asamblea Comunitaria llevada a cabo el veintiocho de febrero, en la que se aprobaron los proyectos a ejecutarse en el Presupuesto Participativo de los ejercicios fiscales dos mil veintiséis y dos mil veintisiete, en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, así como su convocatoria, sin que ello implique reconocer la validez de la viabilidad de los citados proyectos, al no existir pronunciamiento emitido por la autoridad correspondiente.

¹ En adelante juicio de la ciudadanía.

² Si bien en la demanda la parte actora señala como responsable a la Mesa Directiva de la Asamblea de la Unidad Territorial Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, de conformidad con lo razonado en el considerando tercero se tiene como responsable al Coordinador de Enlace Territorial en Santa Ana Tlacotenco. En adelante autoridades responsables.

³ **Secretario:** Orlando Benítez Soriano. **Colaboró:** María Fernanda Calderón Guerrero.

⁴ En lo siguiente, todas las fechas corresponderán a dos mil veintiséis, salvo mención expresa en contrario.

La leyenda de los datos testados se encuentra al final del presente.

ANTECEDENTES

De las constancias que obran en los expedientes, de los hechos notorios⁵, así como de lo narrado por la parte actora se advierte lo siguiente:

I. Contexto

1. Convocatoria. El nueve de enero, el Instituto Electoral de la Ciudad de México aprobó⁶ la Convocatoria dirigida a las personas habitantes, ciudadanas, y vecinas, así como a las Autoridades Tradicionales Representativas de los Pueblos y Barrios Originarios que conforman el Marco Geográfico de Participación Ciudadana vigente para que, en cada uno de ellos se determine el proyecto en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo para los ejercicios fiscales dos mil veintiséis y dos mil veintisiete⁷.

2. Asamblea de Presupuesto Participativo. El veintiocho de febrero, previa convocatoria⁸, se llevó a cabo la Asamblea en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, en la que se aprobaron los proyectos de presupuesto participativo de los ejercicios fiscales dos mil veintiséis -Sustitución de tuberías de agua potable- y dos mil veintisiete -Reencarpetado de vialidades-.

II. Medio de impugnación.

1. Presentación de la demanda. Inconforme con la celebración y acuerdos tomados en la Asamblea antes

⁵ En términos del artículo 52 de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México, en adelante Ley Procesal.

⁶ Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-005/2026.

⁷ En adelante convocatoria.

⁸ La cual, la parte promovente del TECDMX-JLDC-048/2026, manifiesta fue publicada el diez de febrero, lo cual se invoca como un hecho notorio.

indicada, el cuatro de marzo Horacio Valentín Butrón Gardida presentó un escrito de demanda a fin de controvertir, la asamblea de veintiocho de febrero, así como la aprobación del proyecto para el ejercicio dos mil veintisiete -Reencarpetado de vialidades-.

2. Integración, turno y requerimiento. El mismo cuatro, el magistrado presidente de este Tribunal, ordenó integrar el expediente TECDMX-JLDC-017/2026 y turnarlo a la Ponencia de la magistrada instructora⁹, a efecto de que se realicen todos los actos y diligencias necesarias para su sustanciación.

Cabe precisar que en el acuerdo de turno se requirió a las autoridades señaladas como responsables el trámite previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal.

3. Radicación. En su momento, la magistrada instructora acordó radicar en su ponencia el juicio citado al rubro.

4. Trámite e informe circunstanciado. Mediante oficios sin número, recibidos el veintitrés de marzo, las autoridades señaladas como responsables, remitieron documentación relacionada con el informe respectivo.

5. Admisión y cierre de instrucción. En su oportunidad, la magistrada instructora proveyó lo referente a las pruebas, admitió a trámite la demanda y decretó el cierre de instrucción. Por lo que ordenó la elaboración del proyecto de resolución, a fin de ponerlo a consideración del Pleno.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

⁹ Lo que se cumplimentó mediante el oficio TECDMX/SG/285/2026, signado por la secretaria general del Tribunal Electoral.

PRIMERO. Competencia

Este Tribunal Electoral es **competente**¹⁰ para conocer y resolver el juicio de la ciudadanía indicado al rubro, porque los actos que controvierte la parte actora tienen relación con el ejercicio de sus derechos político-electorales, en la determinación del presupuesto participativo en su comunidad, la cual se elige conforme a su sistema normativo interno.

SEGUNDO. Perspectiva intercultural.

El presente medio de impugnación se origina con la demanda presentada por una persona vecina del pueblo originario de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta, a fin de impugnar la Asamblea en la que se aprobaron los proyectos de presupuesto participativo de los ejercicios fiscales dos mil veintiséis y dos mil veintisiete, específicamente la aprobación del proyecto para el último ejercicio mencionado.

Al respecto, conviene precisar que el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, se encuentra incluido en el Marco Geográfico de Participación Ciudadana 2025¹¹ como originario de esta Ciudad y, por tanto, sujeto al reconocimiento del derecho consuetudinario en términos del artículo 2 de la Constitución federal, lo que en el presente asunto se traduce en el derecho a favor de la referida comunidad para utilizar el método que considere idóneo, conforme a sus sistemas normativos, reglas

¹⁰ Ello en términos de lo establecido por los artículos 1, 17, 122, Apartado A, bases VII y IX en relación con el 116, base IV, incisos b), c) y l), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, Apartado D, 38 y 46, Apartado A, inciso g), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 30, 31, 165, fracciones I y V, 171, 178, 179, fracciones II y VII, 182 y 185 fracciones II, III, IV y XVI del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México; 1, 28, 30, 31, 32, 37, fracción II, 122 y 123 de la Ley Procesal; así como 14, fracción V, 26, 124, fracción V, de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

¹¹ Aprobado y modificado, respetivamente, mediante acuerdos IECM/ACU-CG-100/2025 e IECM/ACU-CG-110/2025, emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral.

y/o formas de organización internas y procedimientos, para proponer el proyecto de presupuesto participativo a ejecutarse en los ejercicios fiscales dos mil veintiséis y veintisiete.

Lo anterior, de conformidad con el marco constitucional y los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, en virtud de que en los casos en que se involucran los derechos político-electorales de pueblos indígenas u originarios, y de sus personas integrantes, las autoridades jurisdiccionales deben juzgar con una perspectiva intercultural, buscando privilegiar los principios de autonomía y autodeterminación de quienes integran la población, siempre que no se atente contra los derechos humanos.

Para ello, la SCJN ha señalado que la perspectiva intercultural está integrada por tres dimensiones transversales a todas las actuaciones dentro de un proceso judicial y que son observables en estos procesos¹²:

- **Igualdad formal:** garantizar el trato igualitario en la ley y ante la ley, lo que significa adoptar todas aquellas medidas que garanticen el acceso a la justicia libre de prejuicios, estereotipos y discriminación, así como la garantía de acceso y goce de todos los derechos reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y el orden constitucional;
- **Igualdad sustantiva:** valorar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren las personas, pueblos y comunidades indígenas como consecuencia del racismo, la exclusión y la desigualdad basada en las ideas de raza y etnicidad que generan obstáculos fácticos (estructurales o puntuales) para el acceso a la justicia y el goce pleno de los derechos y adoptar medidas para corregirlas. La igualdad sustantiva o de hecho tiene como objetivo

¹² Protocolo para Juzgar con Perspectiva Intercultural: Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; páginas 121 y 122.

alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas. Este mandato da lugar a remover o disminuir los obstáculos de cualquier índole que impidan a las personas de ciertos grupos sociales sujetos a vulnerabilidad gozar y ejercer tales derechos.

- **La ruta diferenciada:** valorar la diferencia política, jurídica y cultural de las personas, pueblos y comunidades indígenas y adoptar medidas para garantizar que dichas diferencias sean respetadas en el proceso judicial como formas legítimas y válidas de actuación y ejercicio de los derechos por parte de las personas y comunidades indígenas.

Finalmente, para el presente asunto, la valoración de los hechos y la aplicación de las normas jurídicas se realizará a partir de una interpretación culturalmente sensible e incluyente de los hechos y del propio marco jurídico, considerando el sistema protector de las personas involucradas como integrantes de una comunidad originaria de la Ciudad de México.

TERCERO. Precisión sobre una de las autoridades responsables

Como se indicó, la parte actora señala como una de las autoridades responsables a la Mesa Directiva de la Asamblea de la Unidad Territorial Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.

En ese contexto, se debe precisar que quienes remitieron información relacionada con el trámite previsto en los artículos 77 y 78 de la Ley Procesal, fue tanto el Director de Participación Ciudadana y Presidente del Órgano Dictaminador de la Alcaldía Milpa Alta, así como el

Coordinador de Enlace Territorial en el Pueblo de Santa Ana Tlacotenco.

Ahora bien, sobre esta última autoridad, es oportuno señalar que de conformidad con el anexo¹³ a la minuta de trabajo de la Asamblea de veintiocho de febrero, remitida por el Órgano Dictaminador de la Alcaldía Milpa Alta, se advierte que el Coordinador de Enlace Territorial en Santa Ana Tlacotenco, fue integrante de la Mesa de dicha asamblea.

Por tanto, se tiene al referido Coordinador como integrante de la citada Mesa, y autoridad responsable en el presente juicio.

CUARTO. Procedencia

El medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia¹⁴, como se explica a continuación:

1. Forma. La demanda se promovió por escrito; en ella consta el nombre, el domicilio y la firma autógrafa de la persona promovente; asimismo, se identifica a las autoridades responsables, los actos impugnados, además de que se expresan los hechos, se hacen valer agravios y se ofrecen las pruebas atinentes.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo que establece el artículo 42 de la Ley Procesal, el cual dispone que, todos los medios de impugnación deberán interponerse dentro de cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquel en que la parte actora haya tenido conocimiento del acto o resolución

¹³ Consultable a foja 43 del expediente TECDMX-JLDC-18/2026, lo cual se invoca como un hecho notorio.

¹⁴ Previstos en los artículos 41; 43; 46, fracción V; 47; 122, fracción VI y 123, fracción V de la Ley Procesal.

impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable.

Al respecto, es un hecho no controvertido que la Asamblea se celebró el veintiocho de febrero, en ese sentido, si la demanda que dio origen al juicio al rubro indicado se presentó el cuatro de marzo, es evidente su oportunidad.

3. Legitimación e interés jurídico. Estos requisitos se tienen por satisfechos ya que se trata de una persona que se ostenta como habitante del Pueblo de Santa Ana Tlacotenco, por lo que las decisiones asumidas en la Asamblea afectan sus derechos de participación ciudadana.

4. Definitividad. Este requisito se encuentra cumplido dado que no existe otro medio de impugnación que se deba agotar previo a acudir a esta instancia.

5. Reparabilidad. Los actos impugnados no se han consumado de modo irreparable porque de estimarse fundados los agravios, aún son susceptibles de revocación, modificación o anulación por este órgano jurisdiccional y, en consecuencia, es posible restaurar el orden jurídico que se considera transgredido.

Por tanto, al encontrarse satisfechos los requisitos de procedencia del juicio de la ciudadanía, lo conducente es analizar el fondo de la cuestión planteada.

QUINTO. Método de estudio

Este Tribunal Electoral analizará de manera íntegra el escrito de demanda,¹⁵ con la finalidad de identificar los agravios, con

¹⁵ En ejercicio de la atribución dada por los artículos 89 y 90 de la Ley Procesal.

independencia de su ubicación, toda vez que no es requisito que estén contenidos en un capítulo especial.

De ser el caso, se suplirá la deficiencia en la expresión de la inconformidad para desprender el perjuicio que señala la parte actora y salvaguardar su garantía de acceso a la justicia.¹⁶

En ese contexto, de los escritos de demanda se constata que la parte actora hace valer diversos planteamientos, mismos que se pueden agrupar en las siguientes temáticas:

I. Agravios vinculados con la validez de la Asamblea de veintiocho de febrero.

II. Agravios relacionados con la viabilidad de los proyectos aprobados.

Ahora bien, por razón de método, este Tribunal Electoral analizará en primer término los agravios vinculados con la validez de la Asamblea, pues de resultar fundados invalidaría los acuerdos tomados en ella.

En caso de ser infundados, se analizarán los agravios vinculados con la viabilidad de los proyectos aprobados.

El aludido método no causa un perjuicio a la parte actora, debido al criterio sustentado por la Sala Superior, en reiteradas ocasiones en el que señala que lo relevante es que todos sus agravios sean estudiados¹⁷.

SEXTO. Estudio del fondo de la *litis*

¹⁶ Al respecto, es aplicable en lo conducente la Jurisprudencia **J.015/2002** de este Tribunal Electoral, de rubro: **“SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL”**.

¹⁷ En términos de la Jurisprudencia **4/2000**, de Sala Superior de rubro: **“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”**.

Conforme a lo expuesto de manera previa, se realiza el estudio atinente.

I. Agravios vinculados con la validez de la Asamblea de 28 de febrero.

a) Planteamientos.

La parte actora manifiesta que existieron irregularidades graves durante el desarrollo de la Asamblea tales como que se permitió la participación de personas que no acreditaron su residencia en el Pueblo, aunado a que se le indicó a la autoridad responsable que debería cotejar las identificaciones oficiales, sin embargo, esta se negó.

Además, manifiesta que existió una alteración al padrón de votantes ya que de manera inexplicable para el presupuesto participativo dos mil veintiséis votaron ciento cuarenta personas, sin embargo, treinta minutos después para el presupuesto participativo dos mil veintisiete votaron doscientas cincuenta y seis personas, lo que es una afluencia atípica que evidencia la introducción de personas ajenas a la comunidad.

Asimismo, indica que se pudo haber solicitado el apoyo del personal del Instituto Electoral para validar que las personas votantes pertenecieran a la comunidad; sin embargo, el coordinador territorial decidió no solicitarlo, ganando el proyecto propuesto por él.

b) Decisión.

Se determina que los agravios resultan **inoperantes e infundados.**

Respecto a los agravios de la parte actora relacionados con la participación de personas que no acreditaron su residencia, se consideran **inoperantes**¹⁸.

Lo anterior, debido a que la parte actora no proporciona datos específicos sobre el tiempo, modo y lugar en el que presuntamente se hayan verificado los hechos, tampoco aporta ninguna prueba que dé soporte, por lo menos indiciario, sobre su realización.

Lo cual es necesario a efecto de tener conocimiento pleno del lugar en que se afirma sucedieron los hechos, el momento en que supuestamente ocurrieron, y la persona o personas que intervinieron.

Así, no basta con la mera alusión de la participación de personas ajenas a la comunidad, porque la omisión de especificar las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como, aportar pruebas relacionadas con su dicho, impide apreciar si los hechos en los cuales se sustenta la pretensión de nulidad de la Asamblea son o no determinantes para el resultado de la votación.

Al respecto, la Sala Superior ha sostenido que el deber de suplir la deficiencia de los agravios que se hagan valer en los medios de impugnación de los integrantes de comunidades indígenas no implica suprimir las cargas

¹⁸ Sirve de sustento a lo anterior, la tesis **1a./J. 81/2002** de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: **“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO”**. Consultable en: <https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/185425>

probatorias que les corresponden, a efecto de que acrediten los extremos fácticos de sus afirmaciones¹⁹.

En ese sentido, no es posible acreditar la existencia de las irregularidades aducidas por la parte actora, de manera que, los agravios devienen **inoperantes**.

No pasa desapercibido que la parte actora presenta una lista de nombres y firmas que aduce atestiguaron la presencia de personas ajenas al pueblo; sin embargo, en las tres hojas que adjunta, solo se muestra una relación de nombres y firmas, sin que exista algún elemento o nexo causal que permita a este tribunal inferir que efectivamente a esas personas expresaron su voluntad en el sentido que señala la parte actora, pues en esa relación no existe alguna anotación vinculada con algún hecho o circunstancia.

De igual manera resulta inoperante el agravio en el cual aduce que hubo una negativa del Coordinador Territorial de cotejar las identificaciones de las personas participantes, lo anterior es así, pues la parte actora no señala circunstancias de modo tiempo y lugar en el que se dio la supuesta negativa, además de que no aporta algún elemento probatorio con el cual demuestre que efectivamente se haya pedido el citado cotejo al aludido funcionario.

¹⁹ Criterio contenido en la Jurisprudencia 18/2015 de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. LA SUPLENCIA DE LA QUEJA NO EXIME DEL CUMPLIMIENTO DE CARGAS PROBATORIAS, SIEMPRE QUE SU EXIGENCIA SEA RAZONABLE Y PROPORCIONAL. Consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 17, 18 y 19.

Máxime que, en la convocatoria respectiva, no se fijó algún procedimiento para realizar el cotejo que señala la parte actora.

Mismo caso ocurre con la manifestación de la parte actora relacionada con el acompañamiento del personal del Instituto Electoral, pues el hecho de que se dé o no el acompañamiento del Instituto Electoral no es determinante para la validez o invalidez de la Asamblea y sus acuerdos adoptados.

En efecto, en la convocatoria emitida por el Instituto Electoral en su base tercera, apartado I, generalidades, numeral 2 establece que, si las autoridades tradicionales representativas del Pueblo Originario **así lo consideran** podrán solicitar por escrito el apoyo de la Dirección Distrital para que coadyuven en la realización de los actos o eventos de determinación y decisión.

En ese sentido, se especifica que la Dirección Distrital coadyuvará **en los trabajos preparatorios** de los actos o eventos de determinación y decisión, y en la difusión que se requiera para la realización del evento.

De lo anterior, se puede constatar que para su participación se requiere de una solicitud escrita por parte de las autoridades tradicionales, es decir, es un trámite potestativo, por lo que el hecho de que exista o no personal del Instituto no constituye un elemento de validez que afecte la celebración de la asamblea.

Mas aún si en el caso, la parte promovente no acredita que se haya realizado esa solicitud por parte de alguna autoridad tradicional.

Además, la participación del personal es únicamente de apoyo, sin que la misma pueda sustituir o tomar decisiones que les corresponde a las autoridades tradicionales.

Por ello, a juicio de este Tribunal, la circunstancia alegada por la parte actora, no afecta la validez de la asamblea.

Respecto a la diferencia numérica de la votación obtenida en los ejercicios fiscales dos mil veintiséis y dos mil veintisiete, el agravio es **infundado**.

El artículo 120 de la Ley de Participación establece que de conformidad con lo previsto en el artículo 25, apartado F, numeral 2 de la Constitución local, en el año en que se realice la elección ordinaria de autoridades constitucionales no podrá realizarse la elección de Comisiones de Participación Comunitaria ni la consulta en materia de presupuesto participativo.

En dicho supuesto, en la consulta de presupuesto participativo del año previo a la elección constitucional, se decidirán los proyectos para el año en curso y para el año posterior, aspecto que es aplicable en este proceso de consulta ciudadana.

Sin embargo, lo anterior, no implica que en ambos ejercicios deba contarse con el mismo número de votos, pues si bien sería lo ideal, lo cierto es que pueden ocurrir muchos factores que inciden en que una persona se decante por optar por una opción o incluso no votar por ninguno.

En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que para el ejercicio fiscal dos mil veintiséis se propusieron tres proyectos, mientras que para el ejercicio fiscal dos mil veintisiete se propusieron dos. Por lo que ante la pluralidad de

opciones no necesariamente se tendría la misma cantidad de votación emitida, ya que ello es el reflejo de la voluntad ciudadana y su preferencia, así como, en algunos casos también pueden ejercer su derecho de abstenerse a votar al no estar de acuerdo con ninguno de los proyectos propuestos.

Aunado a que la votación diferenciada en modo alguno irroga perjuicio a la parte actora, ya que las personas promoventes también tuvieron la oportunidad de ejercer su derecho a votar o proponer proyectos para ser votados.

Más aún si las personas asistentes a la Asamblea fueron trescientos veinte²⁰, es decir, el rango de personas que participaron en la celebración de la asamblea no es inferior al número de personas que efectivamente votaron, lo cual como se dijo, no es una irregularidad que afecte la validez de la Asamblea, de ahí lo infundado de su concepto de agravio.

Finalmente es **inoperante** el concepto de agravio en el que aduce que el proyecto ganador es el propuesto por el Coordinador de Enlace territorial. Ello es así, pues la parte actora no presenta algún medio probatorio para poder acreditar que efectivamente el proyecto que aduce efectivamente fue propuesto por el Coordinador.

Aunado a lo anterior, lo cierto es que los proyectos fueron sometidos a votación y fueron los ciudadanos que participaron en la asamblea quienes optaron por alguna de las opciones, sin que, en el caso, se hayan acreditado irregularidades que

²⁰ Conforme a la lista de asistencia que fue remitida tanto por la Alcaldía de Milpa Alta como el Coordinador de Enlace Territorial en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco. Visible de la foja 77 a la 90 del expediente TECDMX-JLDC-19/2026.

vulneren la validez de la Asamblea tal como se ha razonado en párrafos previos.

II. Agravios relacionados con la viabilidad de los proyectos aprobados

a) Planteamientos.

La parte actora aduce que el proyecto aprobado para el presupuesto participativo de 2027 -reencarpetado de vialidades- es una acción propia que debe realizar la Alcaldía, es decir, guarda relación con los servicios que presta, por lo que no se pueden considerar en el presupuesto participativo.

Adicional a lo anterior, indica que se permitió la votación de proyectos sin croquis de alcance ni justificación técnica.

b) Decisión.

A juicio de este Tribunal Electoral los conceptos de agravio son **inoperantes**.

En principio, se debe destacar que el procedimiento para la aprobación del presupuesto participativo tratándose de pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México atiende a normas específicas que tutelan su derecho de autodeterminación que son diferenciadas al procedimiento común a las Unidades Territoriales.

En ese contexto, de la aludida normativa que fue aprobada, se puede advertir que el procedimiento establecido constituye un acto complejo, que no se agota con la sola aprobación de los proyectos en la Asamblea respectiva, sino que es necesario el posterior dictamen de viabilidad que en su caso realice la

Alcaldía o bien el órgano dictaminador que al efecto se conforme.

Es decir, que la aprobación de los proyectos en la Asamblea aún debe ser analizada por alguna de las citadas instancias a fin de determinar su viabilidad; de ahí que, en este momento, al no existir una determinación sobre la viabilidad o no de los proyectos aprobados, incluida la justificación técnica, es que los agravios devienen inoperantes.

c) Justificación

c.1 Marco Jurídico aplicable a los pueblos y barrios originarios tratándose del presupuesto participativo

Primeramente, se debe precisar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación²¹ sostuvo que de una interpretación *pro persona*, sistemática, funcional y evolutiva de la normativa constitucional y convencional²², a la luz de los principios de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, se tiene que el derecho de autogobierno de los pueblos y comunidades originarias, consistente en determinar su condición y perseguir libremente su desarrollo integral, incluye, entre otros aspectos, la transferencia de responsabilidades, a través de sus autoridades tradicionales o reconocidas, en relación con el ejercicio de sus derechos a la autodeterminación, autonomía y autogobierno, vinculada con el de participación política efectiva.

²¹ Al resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-35/2020.

²² A partir de lo dispuesto en los artículos 1 y 2, de la Constitución federal, así como 3, 20 y 23, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; 7, párrafo 1, del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Sin que ello implique el desconocimiento e inaplicación implícita del marco jurídico ordinario que resulte aplicable para la implementación y materialización de los instrumentos de democracia participativa a que se refiere la normativa local (Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México).

En ese contexto, la Sala Superior indicó que los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, por conducto de sus autoridades tradicionales de representación, solamente tendrían la posibilidad de determinar -conforme a sus a sus propias normas, procedimientos y prácticas tradicionales- los planes y programas en los que se aplicarán los recursos del Presupuesto Participativo, mas no disponer de forma directa del mismo.

Concluyendo que, desde esa perspectiva, una vez tomada la decisión, las autoridades de los pueblos, barrios y comunidades de mérito, deberán informar a la autoridad competente, para que lleve a cabo la ejecución de los proyectos en términos y para los efectos previstos en la Ley de Participación Ciudadana y demás normativa aplicable.

Ahora bien, de conformidad con el artículo 22 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes en la Ciudad de México, los citados grupos tienen derecho a utilizar los mecanismos de democracia directa y participativa, y en el caso del presupuesto participativo, lo harán de acuerdo con el marco geográfico aprobado por el Instituto electoral local.

Por otra parte, de conformidad con el artículo 363 del Código Electoral, corresponde al Instituto Electoral local la emisión de

las convocatorias, entre otras, la relativa al presupuesto participativo.

En ese sentido, el pasado nueve de enero el Instituto aprobó la convocatoria para el presupuesto participativo 2026 y 2027 en los pueblos y barrios originarios comprendidos en el marco geográfico de participación ciudadana²³, en la cual, para efectos de la presente controversia, estableció lo siguiente:

En la base tercera, se dispuso en su apartado II, numeral 2, que las Autoridades Tradicionales Representativas (ATR) de los Pueblos y Barrios Originarios, en el acto o evento de determinación o decisión podrán aprobar el proyecto de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, actividades recreativas, deportivas o culturales y en general cualquier mejora para su comunidad, en el que se ejecutará el Presupuesto Participativo 2026 y 2027.

Asimismo, se indicó que podrán señalar que los proyectos sean dictaminados por la Alcaldía o por su Órgano Dictaminador e incluso establecer un orden de prelación de los demás proyectos, para ser considerados en caso de que la Alcaldía u Órgano Dictaminador considere como no viable el proyecto original y no pueda ser subsanado.

Así, en la Base cuarta, se estableció que a partir del 1 de febrero y hasta el 20 de abril de 2026, las ATR, en conjunto o a través de la persona o personas, autoridad o autoridades, o los Comités de Ejecución y/o Seguimiento que designaron podrán presentar ante la Alcaldía el Acta o documento en el que consten los proyectos.

²³ Mediante acuerdo IECM/ACU-CG-005/2026.

Teniendo la Alcaldía el deber de publicar el 24 de abril una lista de todos los proyectos que cada Pueblo Originario presentó.

En ese orden de ideas, la Base quinta prevé lo relativo a la dictaminación de los proyectos presentados, en los que se observa que, si las ATR determinan que sus proyectos sean dictaminados por la Alcaldía, dicha autoridad mediante las áreas internas que correspondan de acuerdo con la naturaleza del proyecto que se presente efectuará la dictaminación.

Mientras que, si se determinó que los proyectos sean dictaminados por el Órgano Dictaminador, este cuerpo colegiado realizará la dictaminación de conformidad con lo previsto en la Ley de Participación.

En ese contexto en el apartado I, punto 4 inciso a) y b), de la citada base, se estableció que los proyectos se debían dictaminar del dieciséis de febrero y hasta el diecinueve de junio, y se haría el pronunciamiento sobre la procedencia técnica, jurídica, ambiental, financiera, así como el impacto comunitario y público del proyecto presentado, la cual se llevará a cabo en una sesión de dictaminación.

Además, en el apartado II, de la misma base, se prevé que el sentido de la dictaminación (viable o no viable) será notificado a la persona o las personas o autoridad o autoridades, o a quienes conformen los Comités de Ejecución y/o Seguimiento.

Finalmente, el apartado V, indica que las ATR podrán presentar nuevas propuestas de proyecto cuando: **1)** el proyecto presentado no es viable y no pueda ser subsanado; **2)** no se elabora un orden de prelación y **3)** contando con un

orden de prelación todos los proyectos fueron dictaminados como no viables.

c.2 Postura de este Tribunal

Como se puede constatar del marco jurídico que ha sido precisado, el procedimiento para la aprobación del presupuesto participativo en los que se involucran los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México atiende a la protección con la que cuentan estos grupos vulnerables, pero a su vez se armoniza con las disposiciones propias del presupuesto participativo y la ejecución de los proyectos.

Así, el procedimiento para la aprobación de los proyectos a los que se destinará dicho presupuesto es un acto complejo, pues en el mismo se prevé la participación de las autoridades tradicionales de los pueblos y barrios originarios, así como de la Alcaldía o el Órgano Dictaminador, mismos que actúan en momentos distintos, pero que convergen en la aprobación de los proyectos en beneficio de las citadas comunidades.

En efecto, en un primer momento son las autoridades tradicionales quienes aprueban mediante sus propios métodos el o los proyectos que serán sometidos a la Alcaldía o al órgano dictaminador, para efecto de que analicen la viabilidad o no de los mismos.

Ahora bien, en el caso, el y las actoras impugnan la viabilidad de los proyectos a partir de su aprobación en la asamblea de Santa Ana Tlacotenco que se llevó a cabo el pasado veintiocho de febrero.

No obstante, conforme a lo señalado hasta aquí, es necesario visibilizar y dar a conocer a la persona justiciable que el

análisis sobre la viabilidad de los proyectos se realiza por parte de la Alcaldía o bien por el Órgano Dictaminador, sin que hasta este momento obre en las constancias que integran el expediente al rubro indicado, alguna determinación por parte de esas autoridades.

Incluso en su informe circunstanciado²⁴, el propio Órgano Dictaminador señala que *“no ha recibido ningún proyecto por parte de las autoridades tradicionales del pueblo originario de Santa Ana Tlacotenco”*, siendo que el mismo *“está en tiempo para presentar ante la Alcaldía el proyecto seleccionado de acuerdo a su Sistema Normativo”*.

Es por ello que, a juicio de este Tribunal Electoral, el procedimiento de aprobación de los proyectos que se ejecutaran con el presupuesto participativo aún no se encuentra concluido y, por tanto, en este momento no es posible analizar la viabilidad de los proyectos aprobados por la asamblea, pues aún no existe el pronunciamiento sobre la viabilidad por parte de las autoridades competentes, de ahí lo inoperante de los conceptos de agravio.

Con base en lo anterior, para este Tribunal Electoral los motivos de agravio y razonamientos expuesto por la parte actora son insuficientes para declarar la invalidez de la Asamblea de veintiocho de febrero, así como los acuerdos adoptados en la misma.

Finalmente, se debe indicar que en la sustanciación del presente juicio, el Coordinador Territorial de Santa Ana Tlacotenco, al remitir la documentación relacionada con el

²⁴Visible a foja 31 del expediente TECDMX-JLDC-17/2026.

trámite omitió enviar las constancias de publicitación de los escritos de demanda.

Por lo anterior, se **ordena** al Coordinador Territorial de Santa Ana Tlacotenco para que en lo subsecuente realice las diligencias necesarias a fin de dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones previstas en los citados artículos, relacionadas con la publicitación de la demanda, de lo contrario se podría hacer acreedor a alguna de las medidas de apremio previstas en la Ley Procesal Electoral.

Por lo expuesto y fundado se,

RESUELVE:

ÚNICO. Se **confirma** la validez Asamblea Comunitaria celebrada el veintiocho de febrero, en el pueblo de Santa Ana Tlacotenco, Milpa Alta.

NOTIFÍQUESE conforme a Derecho corresponda.

PUBLÍQUESE en su sitio de internet (www.tecdmx.org.mx), una vez que esta sentencia haya causado estado.

Hecho lo anterior, en su oportunidad, **archívese** el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por **unanimidad** de votos, las Magistraturas integrantes del Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, ante la Secretaria General, quien autoriza y da fe.

**ARMANDO AMBRIZ HERNÁNDEZ
MAGISTRADO PRESIDENTE**

**JOSÉ JESÚS HERNÁNDEZ
RODRÍGUEZ
MAGISTRADO**

**LAURA PATRICIA JIMÉNEZ
CASTILLO
MAGISTRADA**

**KARINA SALGADO
LUNAR
MAGISTRADA**

**OSIRIS VÁZQUEZ
RANGEL
MAGISTRADO**

**LUCÍA HERNÁNDEZ CHAMORRO
SECRETARIA GENERAL**

“Este documento es una versión pública de su original, motivo por el cual los datos personales se han eliminado de conformidad con los artículos 100, 106, 107 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, fracciones XII, XXII, XXIII y XLIII, 169, 176, 177 y 186 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; así como 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, y los numerales segundo, fracciones XVII y XVIII, séptimo, trigésimo octavo, quincuagésimo sexto, sexagésimo y primero de los Lineamientos de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas, y numeral 62 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, colocándose en la palabra testada un cintillo negro”.